

Transiciones conflictivas: combatientes desmovilizados en Colombia

Kimberly Theidon y
Paola Andrea Betancourt*

RESUMEN

La comunidad y los ex combatientes son el referente en una investigación antropológica sobre el proceso de desmovilización y reinserción. El caso colombiano resulta interesante por tratar de implementar mecanismos de reparación y reconciliación en una situación pre/pos-conflicto. Lo que se pretende en este estudio es captar las complejas realidades regionales, para así traducirlas a un proceso de pos-conflicto exitoso. Los conceptos que los desmovilizados manejan sobre la paz y la justicia son un llamado de alerta, y la presencia estatal en las zonas “dejadas” por ellos es una necesidad cada vez apremiante. En Colombia no serán suficientes las desmovilizaciones televisivas con sus aspectos espectaculares. Tampoco el resultado del número de desmovilizados individuales. Aquí no queremos cuestionar la sinceridad de los eventos, sino hacer notar que sin pensar en los procesos sociales que deben acompañar tales eventos, las desmovilizaciones colectivas corren el riesgo de quedarse elementos del statecraft –arte de gobernar– sin resonancia social.

Palabras clave: conflicto, Colombia, desmovilización, reinserción.

Conflictive transition: demobilized fighters in Colombia

SUMMARY

Ex-combatants and the communities that receive them are the key interlocutors in this anthropological investigation of the demobilization and reinsertion process. The Colombian case is of great interest because the government is attempting to implement mechanisms of reparations and reconciliation in a “pre/post-conflict” context. The goal of this study is to capture the complex regional realities in order to have these complexities inform a successful peace process. The concepts these demobilized combatants have regarding peace and justice are striking, and a state presence in zones formerly under the control of armed actors is a pressing necessity. In Colombia, televised demobilizations with their spectacular qualities will not be sufficient. Nor is it enough to count the number of demobilized fighters. While not wishing to question the sincerity of these events, we do not that without careful consideration of the social processes that must accompany these rituals, the collective demobilizations run the risk of being mere elements of statecraft, lacking social resonance.

Key Words: conflict, Colombia, demobilization, reinsertion.

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/5/2006

FECHA DE APROBACIÓN: 28/6/2006

Turbo, septiembre de 2005

Las mujeres llegaron una por una, reanimadas al ver la gaseosa helada que les esperaba. En medio de sus quehaceres y el calor de una tarde soleada, habían aceptado la invitación de hablar un poco con nosotras sobre el proceso de desmovilización que estaba reconfigurando la vida cotidiana de sus comunidades. Con los sorbos, iban bajando el calor y aumentando un poco la confianza. Aprenderíamos que todas tenían esposos, parejas, hijos e hijas en la guerrilla, el ejército, en las autodefensas –en varios casos, todo a la vez–. Algunas sacudieron sus cabezas mientras que iban enumerando sus familiares y los grupos armados a los cuales pertenecían a lo largo de esta interminable guerra. Así llegamos a una de nuestras preocupaciones centrales. “¿Qué piensan que hay que hacer? Sabemos que este proceso es muy controvertido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven?”

Murmuraban entre ellas, algunas evidentemente incómodas. Finalmente una mujer asumió el papel de portavoz. “Pues, si agarramos aquí todos los hombres que han llevado un arma y los ponemos en la cárcel, bueno, nos quedamos en el pueblo sin hombres”.

INTRODUCCIÓN

Un componente clave de los procesos de paz y la reconstrucción de una sociedad pos-conflicto es el desarme, la desmovilización y reintegración (DDR) de los ex combatientes. Los programas de DDR implican una transición, tanto por parte de los combatientes que dejan sus armas, como para los gobiernos que buscan una salida del conflicto, como para las comunidades que reciben los desmovilizados. A cada nivel, la transición implica una ecuación compleja, conflictiva y dinámica entre la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Esta ecuación se complica más aún cuando un país busca implementar el proceso en medio de una guerra. ¿Cómo trabajar estas múltiples transiciones en un contexto “pre pos-conflicto”? Estas preguntas dejan de ser hipotéticas cuando dirigimos nuestra mirada hacia Colombia.

Son estos interrogantes los que nos llevan a pensar sobre la pertinencia del proceso de desmovilización y reinserción implementado en Colombia. El proceso es significativo no solamente en términos de recursos económicos invertidos por el Estado y la comunidad internacional, sino más bien por el desgaste producido en “aquellos” que localmente deben construir la reparación y reconciliación en las comunidades. Nos volvemos a preguntar contemplando el mejor de los escenarios, y de otro lado el peor –pero real– de los mundos: ¿Cómo asegurar que se aprovechan los recursos para lograr una reinserción exitosa –en el mejor de los casos–, o cómo asegurar que el proceso no contribuya al aumento de la violencia y consolide la impunidad –en el peor de los mundos?

Decidimos centrarnos en el proceso vivido, es decir, en el proceso desde las perspectivas de los actores sociales que lo viven cotidianamente. De ahí que nos hemos enfocado tanto en el proceso de desmovilización individual y colectiva, comprometidas en ir más allá de las “mecánicas” del DDR para captar los factores sociales, culturales y económicos que lo influyen. Nuestro enfoque implica una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no pueden generalizarse las conclusiones para ambos procesos; de ahí que evaluemos los casos regionalmente, en forma separada. Empero, es muy ventajoso en términos de evaluar globalmente la política de paz, permitiéndonos deducir la forma en que un proceso influye en el otro, y nos sirve para analizar cómo están las comunidades receptoras de desmovilizados, ya sean individuales o colectivos. Además, nos hace posible construir “indicios” de cómo se va reproduciendo la guerra en Colombia, permitiéndonos pensar

la manera en que se están entretejiendo las motivaciones y los pensamientos de los que aún continúan alzados en armas.

De esta manera, hemos trabajado con ex combatientes de las FARC, ELN y las AUC. Hemos trabajado también con las comunidades y barrios que reciben a los desmovilizados individuales y colectivos, convencidas de la necesidad de estudiar el entorno social. Así que hemos intentado captar tanto las posibilidades como las limitaciones del proceso, con el objetivo de pensar en cómo en medio de las abundantes ambigüedades que generan estos temas, podemos aportar a la construcción de la reinserción exitosa. Pensamos con optimismo y decidimos iniciar esta tarea, porque tenemos una idea clara en los resultados preliminares del trabajo de campo: no dudamos de la gran fatiga de la guerra que caracteriza no solamente a estos ex combatientes, sino a muchos sectores de la sociedad colombiana. Pero así mismo reconocemos la economía de guerra que aún dinamiza el conflicto y pone en tela de juicio cualquier tarea de reparación y reconciliación en lo local. Por eso el aporte que se puede hacer desde un estudio regional es empezar a construir mecanismos que vayan originando cambios estructurales en el pensamiento y el accionar. Dinero hay suficiente; lo que no se ha pensado adecuadamente es en la forma y la manera en que se deben implementar estos cambios. Este es un primer acercamiento a este segundo aspecto.

En el lenguaje internacional, el pos-conflicto puede reunirse en las siguientes tres palabras: desarme, desmovilización y reinserción (DDR). Por supuesto, los programas de DDR no son nuevos en el contexto internacional. Varios países de África, Europa y Centroamérica que presenciaron guerras internas desde una lógica de guerra fría implementaron programas de DDR, muchos con la coordinación de la ONU¹. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que si se entiende al proceso de DDR en términos sólo militares o legales, estaríamos cayendo en el mismo error de entender la paz como el desarme. Insistimos en la importancia de analizar el DDR en términos sociales y culturales, además de lo militar y lo legal; esto es un *proceso*, no un momento puntual de entrega de armas y de cambio de nombre: de combatiente a ex combatiente.

Natalia Springer, en su libro en el que aborda el DDR, hace el siguiente llamado sobre entender la reintegración como la fase determinante de un estado de paz:

Es importante subrayar que la reintegración está directamente relacionada con la convivencia pacífica y la reconciliación social, ambos procesos que de ninguna manera pueden ser impuestos, y que se trata de un desarrollo interdependiente y dinámico, que requiere la cooperación de todo el colectivo social para prosperar; todo lo anterior convierte los resultados a largo plazo de la reintegración en el factor más relevante para la estabilidad y la paz².

Así mismo advierte lo siguiente:

Si hablamos de reintegración pos-conflicto, debemos aceptar que estamos tratando con una sociedad desintegrada. Ahora, en el caso del conflicto armado interno, vale la pena preguntarse ¿Cuáles son las causas de esa desintegración? ¿Por qué tantos individuos se desintegraron de sus tejidos sociales originarios y se desvincularon del pacto de convivencia mediante un acto tan radical como el de la toma de armas?

¹ KNIGHT, Michael y OZERDEM, A. "Guns, Camps and Cash: Disarmament, Demobilization and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace". *Journal of Peace Research*, 2004, vol. 41, n° 4, pp. 499-516.

² SPRINGER, Natalia. *Desactivar la guerra. Alternativas audaces para consolidar la paz*. Bogotá, Editorial Aguilar, 2005, p. 248.

El propósito de este estudio es responder a estas dos últimas preguntas –y otras más– y crear posibilidades reales de reparación y reconciliación sin perder de vista nuestra situación de pre/pos-conflicto.

La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar, realizamos un breve contexto de los dos procesos (colectivo-individual) y un análisis de los principales debates en cuanto al proceso de desmovilización colectiva. Luego establecemos las categorías generales que hemos encontrado en nuestro trabajo de campo, que nos permiten vislumbrar los puntos más urgentes por tratar en cuanto a la reparación y la reconciliación. Finalmente entramos a profundizar en los hallazgos en los estudios de Bogotá y “alrededores”, Medellín y Turbo-Apartadó, para articular los casos de estudio y las categorías establecidas, y así proponer algunas conclusiones preliminares de esta etapa de la investigación en el marco de la justicia transicional.

CONTEXTO

Los antecedentes se ubican el 15 de julio 2003, fecha en que representantes del gobierno colombiano, de la Iglesia católica y de las Autodefensas Unidas de Colombia se reunieron en la localidad de Santa Fe de Ralito para iniciar negociaciones relacionadas con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los paramilitares en la vida civil. La atención al desarrollo del proceso y el seguimiento de su cronología no se hicieron esperar, tanto por los sectores nacionales como internacionales. El acercamiento no sólo tuvo importancia por las expectativas de paz con un grupo armado ilegal de orígenes no muy claros o definidos y con un mando no unificado, sino por tratarse de múltiples estructuras que han recibido fuertes pronunciamientos de continuas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Las sucesivas masacres que se han imputado a los paramilitares reflejan la dinámica de la guerra que azota a Colombia hace más de cuatro décadas, en donde se evidencia un interés de dominio del territorio sobre zonas económicamente rentables en las que el negocio del narcotráfico es evidente o potencialmente explotable, alejándose en términos reales del argumento contrainsurgente con que las autodefensas se fundamentaron o justificaron su *raison d'être*.

En el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia se pactó el cese de hostilidades, la desvinculación de las AUC del narcotráfico, el acompañamiento de la Iglesia católica, el desmonte de las estructuras, con plazo máximo del 31 de diciembre de 2005, y la desmovilización y reinserción de los combatientes. Notamos su contenido para señalar que está lejos de materializarse como un acuerdo de paz, siendo limitado a la entrega de armas y de hombres en un plazo pactado.

Hasta la fecha, un total de 28.357 hombres se han desmovilizados según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En cuanto al registro de las armas entregadas, hasta la fecha estamos hablando de 16.077 armas. La brecha entre desmovilizados y armas entregadas nos sirve para introducir los debates polémicos que el proceso ha generado, no solamente dentro del país sino desde la comunidad internacional y las organizaciones transnacionales de los derechos humanos.

Se estableció que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) se encargara de la verificación del proceso en cuanto al desarme y la desmovilización de los combatientes. De la mano con la Misión, durante los dos años y medio que ha llevado el proceso con las autodefensas, la Defensoría del Pueblo de

[95]

Colombia se ha encargado de reforzar la verificación y el cumplimiento de los acuerdos, y, en dado caso, alertar sobre violaciones a los acuerdos y al cese de hostilidades.

Entre las denuncias que registra la Defensoría desde 2002 se encuentran masacres y abusos contra la población civil aun durante las negociaciones. Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, constata que las AUC son responsables de cerca de 1.900 crímenes durante las negociaciones con el gobierno nacional, violando así el Acuerdo³.

Ante la comunidad internacional, el escenario no es más alentador. El proceso ha recibido críticas tanto de organizaciones no gubernamentales internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, como de organizaciones intergubernamentales como la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, argumenta que los paramilitares “están en el mejor de los mundos” pues han logrado frenar la extradición, imponer las reglas en la negociación con el gobierno, frenar las órdenes de captura en su contra y seguir beneficiándose del narcotráfico⁴. En similares tonos Susan Lee, la directora de Amnistía Internacional, constata que este proceso es sólo una fachada para legalizar a las autodefensas⁵. De otro lado, en el primer informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, entre sus puntos más importantes alerta de la ausencia de un marco jurídico que garantice la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, así como la forma de establecer la justicia y el castigo para los paramilitares acusados por crímenes de lesa humanidad. Se previene sobre los altos grados de impunidad que puede traer esta negociación si no se adopta un marco legal adecuado.

El marco legal actual está reunido por la Ley de Justicia y Paz, sancionada el 25 de junio de 2005 por el legislativo nacional. La ley aún no entra en vigencia, ya que falta el pronunciamiento sobre su exequibilidad en mayo de 2006 por la Corte Constitucional de Colombia. Esta ley ha sido objeto de múltiples debates, por tratarse del instrumento para la materialización de la justicia y la reparación de las víctimas, tal como lo reconoce el CIDH, y de otra parte, para garantizar que el proceso realmente conduzca por sendos de paz y reconciliación nacional.

Entre sus puntos más polémicos se encuentran los que se refieren a las penas que la ley fija para el castigo de delitos atroces, que está en no menos de cinco años ni más de ocho. Otros puntos controvertidos son: que sólo provee un plazo máximo de 60 días para establecer un proceso de investigación a los ex combatientes sobre el cual serán juzgados, y el vacío que deja la ley al no comprometer a los ex combatientes en la confesión de toda la verdad y sólo ser castigado el ocultamiento de algún hecho si se prueba la existencia del mismo. También existen dudas frente a la ley porque permite que los delitos cometidos por las autodefensas pertenezcan a la categoría de “políticos” y así definidos como delitos no extraditables a Estados Unidos. De ahí que las víctimas, las asociaciones de víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se pronuncien, dejando claro que, de ser declarada exequible la ley, Colombia se alejaría de una paz sostenible, se beneficiaría la impunidad y no se harían creíbles los discursos y las prácticas

³ En *El País*, “Alternatividad penal, un proyecto en evolución”. Noviembre 19 de 2004.

⁴ En *El Tiempo*, “Prueba piloto va pasando el año”. Noviembre 24 de 2004.

⁵ En *El Tiempo*, “AI, dura contra proceso”. Agosto 7 de 2004.

de reparación y de paz, pues el mensaje transmitido en el proceso para los aún alzados en armas es el de la impunidad para delitos atroces y el ocultamiento de la verdad.

De otra parte, el proceso de desmovilización individual puede verse en el caso de Bogotá, desarrollado más adelante. Éste responde a un objetivo diferente y se aleja de los debates en torno al proceso de desmovilización colectiva con las autodefensas. Empero, consideramos pertinente su estudio, ya que 10.000 desmovilizados reciben beneficios económicos del Estado y realizan procesos similares de reinserción a los desmovilizados colectivos, con miras a la consolidación de un post-conflicto⁶.

Pensamos que en los mecanismos de reparación y reconciliación no se debe distinguir entre desmovilizados individuales y colectivos, aunque sean procesos diferentes. A nuestro modo de ver, la construcción de DDR debe implementarse con los ex combatientes, independientemente de que sean individuales o colectivos. Nos parece preocupante desde el punto de vista de las víctimas y victimarios –en su mayoría combatientes rasos– la pertinencia de este proceso. Si bien el programa de desmovilización individual puede generar éxitos en términos militares para la lucha contrainsurgencia⁷, ofrece preocupantes limitaciones en cuanto a la reinserción exitosa de ex combatientes en las comunidades, por su sentimiento y temor por ser delatores, por la distancia de sus lugares de origen, y por las exclusiones y los temores comprensibles de las comunidades receptoras.

Por otra parte, desde el punto de vista político también es cuestionada la existencia de este programa, debido a que más allá que debilitar al enemigo, creemos que los mantiene igual o los fortalece en el mediano plazo perpetuando el conflicto y creando efectos adversos a la legitimidad institucional en el momento en que fracase el proceso de reinserción a la vida civil. Cada vez que escuchamos en las entrevistas –de todas las organizaciones ilegales– frases que evidencian que por cada dos desmovilizados ingresan cuatro⁸, ratificamos que debería replantearse esta categoría de desmovilización individual y el seguimiento que brinda el Estado tanto al desmovilizado como a las comunidades y barrios que los reciben.

El complejo panorama colombiano presenta un caso crítico para el campo de la justicia transicional porque nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad o no de trabajar la justicia, la reparación y la reconciliación en medio de una guerra.

PRINCIPALES DEBATES EN TORNO AL PROCESO CON LAS AUTODEFENSAS DE COLOMBIA

Antes de introducirnos en los principales hallazgos de la investigación que adelantamos, consideramos importante señalar los principales debates alrededor del proceso. Esto permitirá evaluar con mayor precisión las posibilidades de implementar mecanismos de reconciliación y reparación de víctimas en un contexto de inseguridad.

⁶ Según cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, Ministerio de Defensa.

⁷ “Es evidente que el programa está en el marco de una estrategia de contrainsurgencia que no es más que uno de los componentes de la política de defensa y seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Ese contenido y ese contexto posiblemente limitan y ponen en entredicho, en varios aspectos, el paso a la vida civil, y más aún, la capacidad de asumir la vida personal y social”. En: CÁRDENAS Sarrias, José Armando, *Los parias de la guerra. Análisis del proceso de desmovilización individual*. Ediciones Aurora, septiembre de 2005.

⁸ El número es caprichoso; lo que se quiere dar a entender es la relación que nos muestra que por cada uno que deserte, ingresan como mínimo dos.

Los debates giran en torno a tres apreciaciones básicas: el origen de las autodefensas, su carácter político y los motivos que llevan a los paramilitares a negociar con el gobierno de Uribe Vélez.

Los estudios que indagan sobre los orígenes de las autodefensas nos remiten a tres espacios históricos (en una clasificación muy general pero no por ello menos pertinente): el período de la Violencia, en donde la iniciativa para la creación fue del Estado; el segundo momento se desarrolla durante la década de los ochenta hasta 1997, cuando se consolida el paramilitarismo en el territorio nacional bajo un proyecto no unificado, sobresaliendo la consolidación de múltiples estructuras que respondían a intereses locales particulares; y el último comienza a partir de 1997, cuando se unifican varias fuerzas autónomas surgidas regionalmente bajo un solo proyecto liderado por Carlos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con miras a ser vistas como *una* sola organización con carácter político “colectivo”.

Pensando en el primer momento histórico, según Daniel García-Peña, la primera aproximación histórica de la creación de grupos de autodefensa se encuentra en “el Decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968 que estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerza armadas”⁹. Como lo argumenta el autor, si bien esta iniciativa puede ser evaluada dentro de un contexto de lucha contra-insurgente heredero de una lógica de guerra fría, esta legislación no tuvo una adecuada reglamentación de estas estructuras y su funcionamiento, convirtiéndose en la opción más apropiada para la protección de los intereses de las elites locales y la expansión del factor narcotráfico en el territorio nacional.

Esto nos introduce en el segundo momento histórico aquí señalado, en el que el fortalecimiento del narcotráfico en los años ochenta (ver Cubides, 2005¹⁰) y la protección de las elites de su estatus político a nivel local en 1982 (en el momento en que el presidente Betancur establece los primeros diálogos con la insurgencia, el caso de Córdoba es ilustrativo y muy bien expuesto en el estudio de Mauricio Romero¹¹), cuestiona el objetivo de la lucha contrainsurgente que las originó, apareciendo múltiples estructuras que respondían y servían a estos intereses particulares. Para esto es relevante traer la apreciación de Camilo Echandía: “(...) al considerar la experiencia de muchas regiones con presencia paramilitar, cabe preguntarse si su oferta de protección no es mayor a la demanda; si la protección que ofrece supone el uso real o potencial de la violencia; y si, en lugar de acabar con una situación de desconfianza, no termina más bien alimentándola”¹².

⁹ GARCÍA-Peña Jaramillo, Daniel. “La relación del Estado colombiano en el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”. En *Revista Análisis Político*, Número 53, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, pp. 59.

¹⁰ Según CUBIDES, Fernando, “Recapitulando el organigrama de los diversos grupos que actualmente conforman el organigrama paramilitar, puede decirse que en la mayoría de ellos no aparece el narcotráfico en su surgimiento, pero aun ellos, a medida que se implantan y conforman nichos de seguridad, tienden a convertir sus zonas en atractivas para la inversión de capitales del narcotráfico”. “Narcotráfico y paramilitarismo: ¿Matrimonio indisoluble?”, en *El poder paramilitar*. Editorial Planeta, 2005, p. 215.

¹¹ Ver ROMERO, Mauricio, *Paramilitares y Autodefensa, 1982-2003*, 2a. ed. Editorial Planeta, febrero de 2005.

¹² ECHANDÍA, Camilo, “El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia”. Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Observatorio de violencia, p. 65.

Es así como se empiezan a dar las discusiones sobre el carácter político de las autodefensas y la pertinencia de su existencia, para ser así declaradas ilegales en el gobierno de Virgilio Barco: mediante “los decretos 813, 814 y 815 de 1989 ... estableció la tipificación de la conformación de éstos como conducta punible y creó el Comité antisicarial para coordinar los esfuerzos interinstitucionales en su contra”¹³. Sin embargo, así como la creación legal generó incentivos adversos al fin de la lucha contrainsurgente, la declaración de ilegalidad contribuyó a la necesidad de consolidarse en un actor político armado, que hiciera sutil la infiltración del narcotráfico justificado en una forma de subsistencia en una economía de guerra contra la insurgencia, que se mostrara con mando unificado y, esencialmente, que fuera objeto de una negociación política, capaz de perdonar las sucesivas masacres imputadas al paramilitarismo, desdibujar la potencialización del narcotráfico, evadir el pedido de extradición por parte de Estados Unidos y propiciar el perdón y el olvido con poca verdad, hacia las víctimas del conflicto.

Se puede apreciar el tercer momento histórico en el año de 1997 cuando Carlos Castaño declara la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); esto coincide con la cuarta ruptura estratégica que señala Juan Garzón en su estudio: “(...) se da la cuarta ruptura estratégica cuyo momento clave es 1997, año en el cual se da la primera conferencia nacional de dirigentes y comandantes de las ‘autodefensas campesinas’ y conforman las AUC”¹⁴. En este punto el objetivo defensivo pasa a ser ofensivo pero conservando aún los intereses federados: “(...) el proyecto de las AUC desde sus orígenes no ha pasado de ser una ficción (...) prueba de esto son las constantes fricciones (...) con conflictos que tuvieron como punto central los desacuerdos entre Carlos Castaño y las comandancias regionales”¹⁵.

Es notable que la unión de estas estructuras atomizadas esté dada por la negociación; la divergencia, en cambio, siempre ha estado marcada por la primacía de intereses privados que favorecen la protección y disputa por territorios para el narcotráfico, y la conservación de un *statu quo* que no cambie el orden en los poderes locales.

Desde este panorama, se aterriza al año 2002 con el inicio del gobierno de Uribe Vélez y la apertura de un cronograma de desmovilizaciones de estas estructuras. El proceso adelantado es cuestionado por los antecedentes aquí argumentados en cuanto a sus orígenes, su razón de ser, sus nexos con el narcotráfico y su *modus operandi* favoreciendo la lucha contra las bases de apoyo de la insurgencia y no el enfrentamiento directo con el enemigo interno, haciéndolo acreedor de violaciones contra el DIH.

Lo anterior es útil ponerlo en consideración porque el fin de un pos-conflicto es establecer procesos de reconciliación y reparación entre víctimas, victimarios y beneficiarios, y más allá del factor “la guerra continúa”, juega el entramado de las lógicas locales en el que se ha discutido la desmovilización y reinserción, pero no qué sucederá ni quién recibirá como herencia la protección de los intereses de narcotraficantes y elites locales; igualmente está en tela de juicio la protección de las zonas liberadas por la fuerza pública colombiana.

¹³ GARCÍA-PENÑA, Jaramillo, Daniel, *ob. cit.*

¹⁴ GARZÓN, Juan Carlos, “La complejidad paramilitar una aproximación estratégica”, en *El poder paramilitar*. Edición y prólogo de Alfredo Rangel.

¹⁵ *Idem*, pp. 84 -85.

Realizar una aproximación histórica a la realidad nos permite empezar a vislumbrar qué tan variables o profundas deben ser las propuestas en cuanto a reparación y reconciliación. Es un reto mucho más apremiante teniendo en cuenta que no es la primera vez que Colombia intenta un proceso de negociación con un grupo armado ilegal, y que además involucra las mismas comunidades, los mismos temores, las mismas incertidumbres y el “reciclaje” de los mismos hombres que reproducen eventos de violencia. Así llegamos a una de las preguntas que ha guiado nuestro estudio: ¿Cómo captar las especificidades regionales –las historias distintas de la actuación de los actores armados en cada región– para desmantelar las estructuras y condiciones que sigue reproduciendo la violencia letal?

¿SUJETOS TRANSICIONALES?

En este texto recurrimos a los hallazgos preliminares de una investigación antropológica que estamos llevando a cabo sobre el proceso de desmovilización individual y colectiva. La primera etapa de la investigación incluyó entrevistas semiestructuradas con 112 combatientes desmovilizados para permitirnos precisar dónde elaborar estudios en profundidad. Al analizar los resultados de estas entrevistas, decidimos enfocarnos en tres sitios que nos permitirían captar las dinámicas regionales: los albergues y fincas de Bogotá; los Centros de Referencia y Oportunidades (CRO) en Bogotá y Medellín, dos comunas en la ciudad de Medellín; y de otra parte, el CRO de Turbo y tres proyectos productivos en Turbo-Apartadó. Las especificidades regionales y locales resaltan la importancia de historiar la guerra y la actuación de los actores sociales en cada región, para pensar en soluciones que respondan a los contextos diversos del país.

Estamos trabajando con los desmovilizados y reinsertados, con representantes de entidades estatales y no gubernamentales, con representantes militares y de los servicios de inteligencia, con las iglesias católica y evangélica, como también con varios sectores de las comunidades receptoras. Insistimos en que la unidad de análisis e intervención tiene que extenderse más allá de los ex combatientes para incluir su entorno social. Sólo así podemos pensar en cómo articular procesos y políticas nacionales con procesos y propuestas locales y regionales.

En términos metodológicos, creemos que la utilidad de las encuestas es limitada para estudiar temas sensibles y procesos subjetivos en un clima de alta desconfianza. Hemos optado por complementar las entrevistas con una presencia más sostenida –un mínimo de dos meses en cada sitio– y por conversar y observar en vez de limitarnos a las entrevistas formales. Estamos utilizando un acercamiento etnográfico para captar las brechas entre el discurso y la práctica. Así esperamos ir más allá de las cifras en blanco y negro para explorar la zona gris que caracteriza las realidades complejas de una guerra fratricida.

Algunas de las preguntas que guían nuestra investigación son: ¿Cómo aprovechar el deseo que expresa la mayoría de estos combatientes desmovilizados de no volver a la guerra? ¿Cómo apoyar a la mayoría de estos ex combatientes que querían cambiar sus vidas? ¿Cómo fortalecer iniciativas locales y regionales para elaborar alternativas aun en medio de una guerra? Finalmente, ¿qué papel debe desempeñar el Estado colombiano –y los actores internacionales– frente al proceso de desmovilización?

Queremos resaltar la importancia de desagregar la figura del “paramilitar” o “guerrilla”, para captar las grandes variaciones que hay dentro de cada grupo, variaciones que incluyen motivaciones en ellos, rango en el grupo y región en el entorno. Queda claro que no se puede generalizar desde los albergues de Bogotá. Tampoco, presumir que la

[100]

realidad de una mafia urbana compuesta de “desmovilizados” en Medellín señala que todo este proceso es “un montaje”. No queremos caer en una lectura romantizada de procesos locales como si la esfera “local” fuera un espacio intrínsecamente más democrático o armonioso. Más bien, insistimos en la necesidad de captar realidades distintas que nos podrían ayudar a formular programas que tomen en serio que no hay una sola guerra en Colombia, sino varias.

“HACERSE RESPETAR”

En la primera etapa del proyecto, conversamos con 112 ex combatientes: 64 de la guerrilla (de ELN o las FARC) y 48 de las autodefensas. De los 112, 14 eran mujeres, todas ellas ex guerrilleras. Notamos que las razones principales para ingresar en la guerrilla eran: 21%, por medio de un conocido que los convenció de incorporarse; 36% ingresó porque vivía en una zona de dominio del grupo armado y entrar en las filas era algo “natural”; 9% era reclutado bajo fuerza o amenaza, y otro 9%, por motivos económicos.

Las principales razones de los ex combatientes de las autodefensas para ingresar en sus filas eran: 29%, por medio de un conocido; 17%, por vivir en una zona de dominio de los paras, donde “lo natural” se vuelve a hacer evidente; 14%, reclutado bajo fuerza o amenaza, y 27% indicó motivos económicos.

En este artículo nos gustaría centrarnos en los hombres, siendo ellos no solamente la mayoría de nuestros entrevistados, sino la mayoría de los alzados en armas. Si combinamos, “vivir en una zona de dominio de un grupo armado” con “entrar por medio de un conocido”, vemos que estos jóvenes crecieron en contextos donde las alternativas a la guerra eran invisibles. Cuando hablamos de “jóvenes,” escogimos la palabra intencionalmente dado que 65% de estos ex combatientes ingresaron en el grupo armado cuando eran menores de edad.

También vale resaltar que viven con imágenes de la “masculinidad militarizada”, tanto los hombres como las mujeres. Especialmente cierto para los ex paramilitares, ya que el incorporarse en las AUC les permite “sentirse un gran hombre en las calles de su barrio”, “salir con las chicas más guapas”, y vestirse mejor, lo que no hubiera sido posible sin llevar un arma. Una meta central del proceso será “desmilitarizar” los modelos de la masculinidad que ellos y ellas manejan, sobre todo cuando tienen tan poco acceso a los símbolos civiles del prestigio masculino, por ejemplo educación, ingresos legales o viviendas deseables. Hacemos énfasis tanto en los hombres como en las mujeres, porque la masculinidad militarizada es parte de un *performance*, y la audiencia está compuesta no solamente de los demás hombres con quienes luchan por un lugar dentro de la jerarquía del grupo armado, sino también “las chicas” que buscan a estos “gran hombres” como parejas deseables en la economía de la guerra.

Empero, aunque la imagen sea “grande”, la realidad fue otra. De los 112 entrevistados, 90% eran combatientes rasos o mandos de escuadra con un manejo de 10-15 hombres. Estamos frente a los “desechables” de la guerra. Resaltamos la necesidad de diferenciar según el rango, y reconocer que la mayoría de estos desmovilizados, si bien borran la línea entre víctima-victimario, no se ubican dentro de los beneficiarios de la guerra. Obviamente las diferencias en rango se traducen en diferencias en términos de ganancias y responsabilidades; también en cuanto a la autoría intelectual, grado de delito y sentido de culpa que ellos y ellas manejan, y que los demás les atribuyen.

[101]

Como estamos aprendiendo en nuestro trabajo de campo, la poblaci3n civil maneja sus propias ideas de “grado de delito” y el castigo que le corresponde; dentro de sus c lculos entra el rango del ex combatiente y cu nta “conciencia” pod a ejercer en medio de los combates.

“VOLVER AL MONTE”

Una frase que aparece con frecuencia en nuestras conversaciones es “volver al monte”, y es un t rmino simb3licamente rico, debido a que no es solamente un concepto geogr fico. Notamos c3mo describen la vida en el monte: aguantar hambre, no dormir bien, enfermarse sin acceso a los medicamentos, vivir en la clandestinidad –matar y ver matar, muchas veces a “gente que ni conozco, gente inocente”. De hecho, en sus razones de deserci3n, m s de la mitad de los combatientes respondieron: “Me cans ” o “me aburr ” de la guerra. Adem s, la absoluta mayor a de los ex guerrilleros expresaron su gran decepci3n, tanto con el ELN como con las FARC: “... trabajar a favor de los pobres, para hacer de Colombia como Cuba. Mentira. Los comandantes son ricos, ganando del narcotr fico. Esta guerra es un negocio”. Volveremos a este sentido de decepci3n m s adelante en el texto.

Adicionalmente, se alamos que volver al monte es volver a estar lejos de la familia y los lazos afectivos que sirven como un hilo humanizador. De todos los combatientes, casi un 25% afirm3 que desert3 por motivos familiares. Hay que recalcar el peso de los lazos familiares que jalan a estos individuos actualmente, y que les hicieron recordar que todav a eran seres humanos all  en el monte.

Recordamos uno de los administradores del CRO en Turbo, quien nos habl3 sobre sus experiencias trabajando con “los muchachos”. Como explic3 con una sonrisa: “Algunos por supuesto dicen ‘si no me pagan, vuelvo a monte’. Yo pues, les digo, que se vayan”. Anunciar que van a volverse al monte es una amenaza de doble filo, porque es lo que la gran mayor a de estos “muchachos” menos quieren.

De hecho, nuestros hallazgos nos permiten insistir en que hay una gran voluntad por parte de los desmovilizados de dejar la guerra, pero viven esta voluntad en medio de una guerra.  La iron a? Ellos y ellas s  son “sujetos transicionales”; lamentablemente, el contexto social todav a no.

 PAZ Y JUSTICIA?

Dentro de las respuestas llamativas para nosotras est n las que se refieren a aquellas sobre c3mo conceptualizan la justicia, qu  opinan sobre el proceso de desmovilizaci3n colectiva con las autodefensas, y si piensan que el pa s est  en el camino hacia la paz.

De los 112 combatientes desmovilizados, 96% expres3 sus profundas dudas con respecto al proceso de desmovilizaci3n colectiva. Con la excepci3n de Turbo-Apartad3, los ex combatientes en su conjunto describieron el proceso como “un montaje”, como “una farsa”. Por ejemplo, un ex paramilitar de 27 a os, en Bogot  nos asegur3: “Las negociaciones no est n cambiando nada. Est n convirtiendo lo ilegal en lo legal y nada m s”. De igual modo, varios de los ex guerrilleros insistieron en que no pueden confiar en el proceso porque “el Estado mismo est  paramilitarizado. Uribe es el presidente de los paracos. Es m s derecho que torcido”.

Sin embargo, sus dudas van m s all  del proceso de desmovilizaci3n colectiva; manifiestan un pesimismo profundo frente a la posibilidad de paz en su pa s. Especialmente en los albergues o en las fincas donde est n lejos de sus lugares de origen, la paz parece

[102]

impensable. Por ejemplo, L. N., un ex paramilitar de Medellín, insistió: “La paz no llega. La paz no es entregar armas. Hay muchos civiles que quieren ir a las filas. Cada loco con su tema. El mío fue que me quedé sin trabajo”. Otros insistieron: “La paz solamente se encuentra en cada uno”, o “Paz, no la veo”. La respuesta más optimista que escuchamos, salvo en Turbo-Apartadó, fue: “¿Paz? Ojalá que haya algún día”.

Sus conceptos acerca de la justicia son igualmente impactantes. Para los ex combatientes de la guerrilla, la justicia muy a menudo está relacionada con los “consejos de guerra” que administran en la guerrilla. Por ejemplo, J. M. es un desmovilizado del ELN. Tiene 28 años y pasó trece años en la guerrilla, operando en Urabá. Entró en la guerrilla porque le prometió un sueldo que nunca recibió. Desertó cuando otros integrantes del ELN mataron a su hermano, quien fue “milicante del soldado”. Nos explicó como funciona el consejo de guerra:

Por ejemplo, usted entrega un mercado que vale 30.000, pero usted tiene hambre, pero está prohibido sacar parte del mercado. Si usted lleva galletas, pan, gaseosas, lo castigan... usted no puede sacar sin orden del mando. Si incurre en falta, si es de buenas, le sancionan. Así es el consejo de guerra. Primero eso. Y si es de malas, lo matan a uno. Por un paquete de galletas, matan a uno. Lo llaman delante a todos, el consejo de guerra dicen, y lo matan delante a todos los compañeros. Los compañeros se quedan calladitos, si no, le matan a uno. Ellos nos llamaban allá. Si uno tenía mucha hambre, y como no sabía, se comió las cosas. Lo fusilaron. Así es el consejo de guerra.

De modo similar, L. R., quien había pasado ocho años en las FARC, nos explicó cómo conceptualiza la justicia: “La justicia para mí es como llegar y coger a otros comandantes y hacerles consejo de guerra. O sea, si uno quiere fusilamiento, se les hace consejo de guerra para que dejen de ser. O sea, justicia es que cada uno pague por lo que hace”.

De hecho, la *lex talionis* predomina en nuestras conversaciones. Las respuestas más comunes:

- “Que cada uno hace justicia a su manera”.
- “Justicia es ..., bueno, si alguien mata a mi papá, le mato a él”.
- “¿Justicia? La palabra no tiene sentido”.
- “No creo que existe. Lo que hay que hacer es cobrar venganza”.

Incluso en los casos en que ellos dejan la administración de la justicia a Dios, entra la posibilidad de “darle la mano”, como nos explicó J. C., quien pasó trece años en las AUC: “¿Justicia? Bueno, dizque Dios, pero uno no se la puede dejar a Dios porque es un hombre muy ocupado. Uno tiene que hacerlo uno mismo, ayudarlo”.

Lo que queremos resaltar es la completa ausencia del Estado en sus respuestas sobre la justicia. El Estado como un actor, un intermediario o un protagonista, sencillamente no aparece: la idea de recurrir al sistema judicial ni entra en el retrato.

LA DECEPCIÓN

“La guerrilla pudrió desde adentro, como los paramilitares. Se pudrieron desde adentro”.

(Representante, Iglesia católica, Turbo, septiembre de 2005).

[103]

Como hemos señalado, dos factores clave para desertar es la “fatiga de guerra”¹⁶ y que los ex combatientes extrañaron a sus familiares. Queremos ahora considerar otra variable que fluye en las conversaciones que hemos tenido con los desmovilizados, o sea del ELN, de las FARC o de las AUC. Es el tema de la decepción. Como veremos, lo que provocó tal decepción varía según el individuo y el grupo al cual perteneció, pero lo que unifica sus respuestas es el sentido de haber sido engañado o explotado.

Tomamos el ejemplo de J. M., un ex combatiente del ELN con quien conversamos en Bogotá. En un momento, le preguntamos: “¿Por qué luchan?” Así nos respondió:

Me da rabia que me engañó. Eso es mentira pa’ mí. Ellos dicen para ayudar al pueblo. Mentira. En la reunión, yo allí no comprendía por qué si estamos ayudando al pueblo, ¿por qué hacemos daño? La carretera, la policía, los soldados, entonces, no estamos ayudando. Estábamos haciendo guerra. Yo les decía, ¿por qué?, y ellos me decían que estábamos ayudando. Pero, ¿por qué dañamos los puertos? ¿Por qué tumbamos las torres? Entonces, estamos haciendo la guerra. Hay un muchacho, C. A., preguntó para qué matan al campesino. Por nada. Por hacerlo matar al otro. Por nada. Por cuidar una vereda, una plata. Dicen vamos a matar un sapo. El sapo, ¿qué culpa tiene? Eso no es un sapo. ¿Sapo qué es? Ellos tratan de sapo a uno si le dice algo a la policía. Así es la guerrilla. Y el paraco, que por aquí pasaron, viene armado. Sólo por decir eso, dicen que es informante de la guerrilla. ¿Qué hacen? Nada hacen. Así matan a civiles inocentes”¹⁷.

Igualmente, O. G., un ex combatiente de las FARC nos aseguró que las FARC no van a negociar “porque no les conviene económicamente. Con el narcotráfico, ganan mucho y pueden seguir así. La guerra es un negocio”. Así que le preguntamos cuánto había ganado, y sacudió su cabeza: “Los comandantes son ricos, ganando del narcotráfico. Los comandantes se quedan con todo, y nosotros ¡con nada!”

La idea de que los comandantes –sean de las FARC, ELN o las AUC– se enriquecen mientras que los demás “pagan la cuenta” fue generalizada. Por ejemplo, J. P., del ELN, nos contó que: “La guerra es muy dura. Además los comandantes se quedan con todo el dinero que da la coca y uno se queda sin un peso y es el que pone el pecho en la guerra”.

Además, con los ex combatientes de las AUC, frecuentemente la decepción surgió de la forma como los comandantes maltrataron a los demás. Por ejemplo, N. R. pasó dos años en las AUC en Medellín. Se desmovilizó individualmente porque: “Me cansé, me aburrí de tanta injusticia entre comandante y patrullero”. Cuando no hay una ideología –o por lo menos un discurso– que une a los combatientes, las injusticias cotidianas van a generar mucho rencor.

Empero, nos parece que la “decepción” tiene otra fuente: nos impactó lo difícil que es para muchos de estos hombres reconciliarse con lo que han hecho. Es decir, la decepción surge de la brecha entre lo que quieren creerse –o hacer creer a sus interlocutores– y lo que han sido o son.

Por ejemplo, R. M., 24 años, pasó cinco años en las FARC. Se encuentra en Bogotá porque no puede volver a su tierra. “Yo me vine porque yo quería cambiar mi vida. Y no me gustaba matar a los demás que no tienen culpa. Ni uno tampoco. Matarse uno por-

¹⁶ Este término puede ser una consecuencia de una mayor intensidad de la guerra o combates con el enemigo, de las fuerzas armadas o de un grupo ilegal (enemigo).

¹⁷ Por supuesto, no todos expresaron remordimiento. De hecho, algunos nos describieron animadamente cómo mataron y por qué les gustó matar. No tenemos el espacio en este texto para elaborar sobre el lado psicológico, que merece otro artículo.

que ni uno sabe por qué se mata, por qué está luchando...”. Su voz se iba apaciguando, “no quisiera recordar. A veces me pone mal. No quisiera recordar porque el pasado es el pasado”. Sí, pero un pasado tan presente.

Adicionalmente, muchos de los ex guerrilleros insistían en que “mataron decentemente”, y contrastaron sus métodos letales con los de los paramilitares. Hicieron énfasis en que los paramilitares “pican a sus víctimas” –que pican sus cuerpos mientras que están todavía con vida– en contraste con la muerte rápida y “decente” que ellos mismos administraron. Empero, esta “decencia” tiene su contraparte en los ex combatientes de las AUC que insistían en que eran “buenas personas” porque no mataron a todas las personas que debían haber matado, dejando que algunas escaparan. Intentan preservar alguna imagen de ellos mismos como gente moral, en medio de toda la evidencia en contrario. Pensamos en la palabra “decepcionar”, que significa engañar o desilusionar a los demás, o a uno mismo.

Ahora nos gustaría tocar algunas de las diferencias que hemos encontrado regionalmente y que vamos a profundizar en nuestra investigación.

BOGOTÁ

El caso de Bogotá responde a un modelo de “desmovilización individual”. De hecho, el 99% de los desmovilizados en Bogotá corresponde a la categoría “desmovilización individual”, y 95% son de otra parte de país. Es un proceso que se desarrolla por medio de albergues en la ciudad o algunos ubicados en ámbitos rurales aledaños a Bogotá.

Nos parece que es un modelo de limitada utilidad, y que confunde procesos jurídicos con procesos sociales. Es decir, si bien hay un cambio en el estatus legal de los ex combatientes, no significa que se traduzca en cambios sociales, que les permitirían sentirse nuevamente parte del contexto social. De hecho, en las entrevistas que hemos realizado con miembros de las comunidades donde se establecieron los albergues, queda claro que el gobierno elaboró su metodología sin consultar a la población civil. Por tanto, ella vive mirando a estos muchachos con temor o, como alguien comentó sobre el proceso similar en Medellín, “los miran como una nueva raza”. El estigma les sigue, tanto como el temor por su propia seguridad. Como nos contó un ex paramilitar, “temo el Plan Pistola”, apuntando a su cabeza con un dedo. “Sabemos que estamos siendo buscados por los grupos armados. Envían asesinos”. Por esa razón, tienen miedo de “boletearse en el pueblo”, o sea, miedo de hacerse notar por los demás y por consiguiente correr el riesgo de ser blanco de algún grupo armado.

En adición a los temores que sufren, están los temores que provocan. Algunos hicieron referencias a los que les deben estar mirando, aceptando lo difícil que sería volver a sus lugares de origen. Por ejemplo, B. L., un ex combatiente de las AUC, nos dijo: “En Bogotá, porque muchas personas no saben qué es, muchas personas no saben mirar un hombre armado, ¿no? Un brazalete de un grupo ilegal. Pero los que saben, es diferente. Los que hayan sido maltratados, hay miedo y resentimiento contra uno”.

Estos temores mutuos nos llevan a una preocupación central, bien expresada por uno de los administradores del programa en Bogotá:

La verdad, creo que es un proceso muy complejo. Primero los beneficiarios del programa corren un riesgo cuando salen muy temprano del albergue pues nadie sabe qué van a hacer en un hogar independiente. Aparte de eso, luego que se acabe la ayuda que les da el Estado –es un problema en el futuro de los muchachos porque de una parte está el cómo van a vivir si no tienen la ayuda del Estado y por otra parte está que la comunidad

[105]

no sabe c mo recibirlos-. No se ha trabajado con la comunidad para que ellos tambi n se acostumbren a los desmovilizados. Poco se ha preocupado de c mo poder vivir juntos.

“Vivir juntos”. Volvemos a la idea del entorno social y de los lazos familiares. Estos ex combatientes viven aislados tanto del contexto social como de sus familias. El programa sigue reproduciendo su marginalidad sin pensar en c mo ayudarlos tanto a ellos como a las comunidades receptoras, a elaborar una convivencia que no est  sujeta al temor y al rechazo mutuo, y que no sea envenenada con el alto componente de impunidad que ha caracterizado el proceso hasta la fecha.

MEDELL N: “ADMINISTRANDO LA CALMA”

...todo lo que se mueva y todos quienes se mueran en Medell n, es don Berna quien decide.

(Entrevista, ex comandante, AUC, diciembre de 2005).

Si bien Medell n ha sido receptora de desmovilizados colectivos y de un peque o porcentaje de desmovilizados individuales, la ciudad esconde din micas importantes detr s de la disminuci n de la violencia. Todo parecer a indicar que los paramilitares desmovilizados est n efectivamente reconfigur ndose como una mafia, y es evidente su inter s por “administrar la calma” en la sociedad.

No aseguramos que el proceso sea un montaje desde el punto de vista institucional; lo que notamos es que hay un control racional sobre plazas rentables, ya sea por la transacci n de productos ilegales (armas y drogas), o las “vacunas” sobre los productos legales. Adem s notamos que existe obediencia de los desmovilizados a las autoridades p blicas, pero lo que creemos que es dif cil y poco sostenible en el tiempo es que dicha obediencia se traduzca en que ellos sigan encargados de “mantener la calma sin armas” en las comunas, y que no sea m s bien el Estado el intermediario o el interlocutor de los conflictos y de la seguridad. Como nos han asegurado, esto es mantener una “calma perversa” en la ciudad.

Tan es as , que al asistir en una comuna a un juego de f tbol, una mujer nos relataba el desarrollo del proceso y nos asegur :

... antes en Medell n no se pod a caminar de una cuadra a otra porque si no lo mataban, siempre hab a que pedirle permiso a los que manejaran cada barrio, ... era un peligro andar de noche y subirse a los buses ..., y se viv a una zozobra amenazante (...) ahora es diferente, ya se puede andar de un lado para otro, esto ha cambiado mucho ..., ya los muchachos est n tranquilos y si uno tiene problemas uno va donde ellos y el asunto queda arreglado (...). Ante cualquier inconveniente los encargados de ajusticiar o decir qu  deb a hacerse eran los muchachos y que ahora por eso no pasa nada (...) ellos cuidan de que no pase nada, ahora son m s pac ficos (...) la desmovilizaci n fue buena porque ya podemos andar tranquilos... pero todav a recurrimos a ellos.

Nos preguntamos,  no deber an recurrir al Estado o mejor a n, a las instituciones, que no jueguen con la memoria doliente de la comunidad,  sta que ya quieren superar? Y de otra parte,  de qu  depende la voluntad de que ellos sigan “pac ficos”?  qu  puede explicar o propiciar que cambie esta situaci n?

En este mismo escenario notamos que el temor sigue presente en la comunidad; este se disfraza en apoyo hacia ellos. Estamos seguras de que en el pasado los hoy desmovilizados hicieron da o en la comunidad, y  c mo explicar que se favorezca el apoyo hacia ellos, m s cuando existe la evidencia de que pocos saben que hoy ya no son combatientes

[106]

sino desmovilizados? Reiteramos el reconocimiento al trabajo que hacen las autoridades públicas en la labor de reinserción, pero estamos convencidas de que hace falta bastante para desarticular socialmente el paramilitarismo en la ciudad.

Esto es mejor explicado en las palabras de F. N., ex comandante de Bloque Cacique Nutibara, con quien conversamos en diciembre de 2005: “Sí, se están rearmando, y están reapareciendo nuevos grupos. Las estructuras económicas de las autodefensas siguen. Básicamente, lo que ocurre es un control social. La gente sabe quién es el patrón y así funciona todo. Por aquí en Medellín hay mucha droga y todo sigue siendo lo mismo... sino [que] ahora es bajo otra figura”.

Otro llamado de alerta lo encontramos en un testimonio de un líder empresarial que contrata desmovilizados en la ciudad. Sus argumentos constatan la economía de guerra y de la lógica que mantiene vivo el conflicto colombiano. Sus justificaciones económicas son interesantes, pero lo son más las sociales o psicológicas que justifican nuestra intervención desde la antropología. Al mismo tiempo, con resignación, expresa poco optimismo de las expectativas de paz en Colombia:

En mi concepto, el proceso fracasa no por la gestión gubernamental. Fracasa porque los hombres que se desmovilizaron están acostumbrados a manejar un flujo de dinero considerable. Segundo, por lo que da el poder de manejar un uniforme, un arma, el tener sus carros bonitos, el poder que significa para ellos que pueden ingresar a un pequeño municipio y escoger a la mujer que más les gusta. Estas son cosas que al ingresar a una vida común y corriente, cosas como el salario que obtendrían que no es ni de lejos lo que ellos obtienen como recursos en la firma de paz. No van a ser los fuertes sino van a pasar a ser una escala social, *una especie de nueva raza*. Son reinsertados por todo el mundo.

[107]

Así mismo, advierte de una gran diferencia entre los grupos ilegales de izquierda frente a los de derecha, y nos habla específicamente del caso de Medellín y la presencia paramilitar “incontrolable”: “La presencia paramilitar es bastante notoria sobre todo en los estratos socioeconómicos que no necesariamente son los más bajos. Está ubicado en los altos niveles productivos, en empresas públicas y privadas, en organizaciones gubernamentales, empresas públicas; manejan algo más elevado, que es el poder legal”.

Como se observa, la desconfianza en el proceso de Medellín no es sólo de las personas que habitan los sectores socioeconómicos bajos. También se produce en sectores de estratos altos y aun en el personal que administra el programa y vive cotidianamente con las contradicciones. Hay que trabajar en la justicia de parte del Estado y de sus funcionarios, en la legitimidad institucional; no hay que dejarse convencer por la disminución de los homicidios, ni por la entrega de armas ni de hombres en el tiempo. Es un proceso muy complejo, y en mayor medida en Medellín, por lo estratégico que es su territorio para diversos sectores. Si bien han entregado hombres y armas, la estructura y el poder paramilitar siguen dominando la ciudad.

TURBO-APARTADÓ

Cuando hablamos con las víctimas, les decimos ¿qué quieren? Nos responden: vivir tranquilos, trabajar en paz, que no se suceda más.

(Representante de la Iglesia católica, Apartadó).

Nuestro último estudio en profundidad es Turbo-Apartadó. Como nuestro grupo focal con las mujeres indicó, aquí la guerra no es un asunto de “los otros”, sino de víctimas,

victimarios, beneficiarios de la guerra, que viven todos mezclados en la misma comunidad. Vale resaltar que cuando nos referimos a los beneficiarios de la guerra, no nos referimos solamente a aquellos que tomaron las armas, sino a las elites econ micas y pol ticas que auspiciaron esta violencia. Como nos cont  un representante de la Iglesia cat lica en Apartad : “Las elites regionales –estos lameladrillos que siempre rogaron a estos dioses (los paramilitares)– ahora vienen llorando,  quien nos va proteger ahora?”. Cuando calculamos qui nes deben financiar este proceso, estas elites tienen una silla reservada en la mesa.

Brevemente, mencionamos los proyectos productivos que se est n elaborando en la zona como un componente del proceso de desmovilizaci n. Estos proyectos podr an servir como un modelo cuando pensamos en programas que buscan no solamente la entrega de las armas sino, tambi n la reconstrucci n de la convivencia, que tiene que incluir los temas de la justicia en sus m ltiples sentidos, la reparaci n simb lica y econ mica, y la reconciliaci n.

El programa en Turbo cuenta con un comandante que ha mostrado su compromiso con el proceso y quien cuenta con el respeto de estos muchachos. El comandante, quien pidi  perd n frente a una asamblea p blica cuando comenz  el proyecto, tiene el respeto de los hombres que serv an bajo su mando. Como  l mismo nos dijo, “tienen que ver que vale la pena dejar las armas”. Hay que pensar en c mo utilizar la jerarqu a mientras que se desmonta –todo tiene su temporalidad–, y las estrategias que le corresponden.

El CRO en Turbo coordina varios proyectos productivos, y cada proyecto incluye 50% desmovilizados, 25% desplazados y 25% miembros de las comunidades donde se ubican. Intentan proveer un espacio para la socializaci n, y para evitar que solamente los desmovilizados se beneficien del programa. Uno puede imaginar los rencores y resentimientos que se podr an generar.

De hecho, los propios participantes del proyecto ganadero conversaron sobre los rencores y c mo manejarlos. Elaboraron sus reglamentos internos, votaron por su junta directiva, y le otorgaron el poder de imponer multa para los insultos (\$10,000) y para las peleas. Como nos explic  el vocero: “Esta convivencia es importante. Aunque cuando uno est  bebiendo (licor), se recuerdan muchas cosas y ah  pueden venir los problemas. Pero tratamos de buscar m s responsabilidad frente a lo que queremos hacer y ser para la sociedad, ya que los seres humanos somos dif ciles de manejar”.

Obviamente nuestra meta no es “romantizar” tales proyectos. Empero, muestran la creatividad que existe en las iniciativas que la poblaci n puede elaborar, y los procesos nacionales deben nutrirse de tales ejemplos.

ARTICULACIONES

La comunidad colombiana ha sido muy generosa para permitir estas reinserciones. La comunidad colombiana nos va a seguir acompa ando con su generosidad, porque cada joven que abandona un grupo terrorista y toma la decisi n de reinsertarse es la eliminaci n de un camino de violencia y la construcci n de un sendero de paz. Es la eliminaci n de un camino de tragedia, de tristeza, de luto, y la construcci n de un camino de alegr a.

(Presidente Uribe, 16 de julio de 2005, discurso en la Instalaci n del Tercer Consejo de Ministros P blicos).

En nuestros trabajos previos en Per  con la Comisi n de la Verdad y Reconciliaci n, Sede Ayacucho, estudiamos c mo la gente intenta reconstruir la vida social y la sociabilidad

[108]

después de la violencia “íntima”¹⁸. La centralidad de los procesos y las iniciativas locales es notoria: la reconciliación se vive “localmente”, con los vecinos, los familiares, con uno mismo.

Una suposición central de la justicia transicional es que incluye importantes aspectos de *performance* (funcionamiento). Por medio de los rituales seculares incorporados en las prácticas legales transicionales, los colectivos participan en la “purificación ritual” y el reestablecimiento de la convivencia grupal.¹⁹ Desde esta perspectiva, la ley no es solamente un conjunto de procedimientos sino también de rituales seculares que marcan una ruptura con el pasado y la fundación de una nueva comunidad moral. Aunque la literatura sobre la justicia transicional se ha enfocado casi exclusivamente en las esferas nacionales e internacionales, la justicia transicional no es el monopolio de los tribunales internacionales ni de los estados-naciones. Las comunidades también movilizan los elementos rituales y simbólicos de estos procesos transicionales para hacer frente a las brechas profundas dejadas –o exacerbadas– por los conflictos civiles²⁰.

En Colombia, no serán suficientes las desmovilizaciones televisivas con sus aspectos espectaculares. Tampoco el resultado del número de desmovilizados. Aquí no queremos cuestionar la sinceridad de los eventos, sino hacer notar que sin pensar en los procesos sociales que deben acompañar tales eventos, las desmovilizaciones colectivas corren el riesgo de quedarse en elementos del *statecraft* (arte de gobernar), sin resonancia social. Corren el riesgo de confirmar lo que muchos de estos ex combatientes temen: que todo es un “montaje”: el Estado en su registro teatral, orquestando una transición que no suena más allá de la televisión.

De hecho, con frecuencia los procesos de paz, las “transiciones democráticas” y la reconciliación nacional son poco más que la reconfiguración de los pactos de gobernabilidad o de dominación entre elites. En esta versión *light* de la reconciliación, son los mismos interlocutores de siempre, y los mismos silencios y exclusiones.

Si uno quiere aprovechar la voluntad que muchos de los desmovilizados muestran por cambiar sus vidas e incorporarse en “la vida legal”, los rituales públicos deben tener eco en las comunidades donde las víctimas, los victimarios y beneficiarios tendrán que construir una nueva convivencia que por necesidad requerirá una redistribución de recursos y poder.

Por ejemplo, tomamos el caso sudafricano, donde el discurso de la reconciliación nacional fue, en gran medida, un discurso de los líderes políticos y religiosos. En su análisis de la CVR sudafricana, Wilson la critica por haber desplegado el concepto de reconciliación desde arriba hacia abajo, dejando poco espacio para hablar de los sentimientos de retribución o venganza que operaron en el ámbito local. La brecha entre los procesos nacionales y locales fue notoria: no había mecanismos para traducir esta gran visión de la reconciliación nacional en el nivel local. Más bien, las elites religiosas y políticas se

¹⁸ Ver THEIDON, Kimberly, *Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2004.

¹⁹ TEITEL, Ruti, *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000; MINOW, Martha, *Between Vengeance and Forgiveness*. Boston: Beacon Press, 1998; BORNEMAN, John, *Settling Accounts: Violence, Justice, and Accountability in Postsocialist Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1997.

²⁰ Ver THEIDON, Kimberly, “Justice in Transition: The Micropolitics of Reconciliation in Post-War Peru”. *Journal of Conflict Resolution*, 2006, Vol. 50, n° 3.

apropiaron del término “reconciliación” como una meta-narrativa para reconstruir tanto el estado-nación como su hegemonía posterior al *apartheid*.

Como Wilson argumenta:

La incapacidad de traducir el proyecto de la reconciliación nacional en la reconciliación local resultó de la falta de algún mecanismo para la solución de conflictos dentro del marco de la CVR para negociar el retorno de antiguos ‘parias’ a la comunidad. En las áreas principales de conflicto, la CVR se convirtió en un performance ritualizado, con poca organización concreta para implementar realmente su visión grandiosa de la reconciliación²¹.

Por esta razón, resaltamos la importancia de pensar en cómo reincorporar a estos desmovilizados en las localidades donde vivirán, sin recurrir solamente a la “generosidad” de la sociedad colombiana, una generosidad que podría verse gastada por los efectos corrosivos de políticas estatales que no toman en cuenta la necesidad de trabajar tanto con los victimarios como con las víctimas y los beneficiarios, todas siendo categorías que se borran en el contexto de una guerra prolongada.

CONCLUSIONES

Estos muchachos, en la vida, ¿qué ha hecho el Estado por ellos?

(Representante de la Iglesia católica, Apartadó).

[110] En esta etapa de nuestra investigación, podemos dilucidar varias conclusiones preliminares y con el ánimo de seguir siendo profundizadas. Lo más urgente de señalar es que el Estado debe brindar seguridad, llenar el “vacío” y generar alternativas no sólo para estos ex combatientes sino para las comunidades que los reciben. Con esto el proceso cobrará sostenibilidad en el tiempo. No hay que confundir el apoyo a las nociones de justicia que las comunidades crean con quien administra esa justicia: insistimos en que deben ser autoridades del Estado.

Creemos que la comunidad internacional podría brindar veeduría y acompañamiento a cada etapa del programa de DDR, con un énfasis en el “R”. Los estudios comparativos sobre el DDR indican que la fase menos investigada –y más problemática– es precisamente la reintegración²². Adicionalmente, hay que transmitir un mensaje positivo a los aún alzados en armas y los más distantes al gobierno (especialmente las FARC), en el sentido de apoyar todos los procesos de paz y desmovilización, y no hacer sentir que “se prefiere” a los asesinos de derecha y no a los de izquierda.

Como hemos insistido, el discurso de la reconciliación y reparación no puede ser construido solamente por líderes políticos y religiosos como en Sudáfrica, que intenta reconstruir el Estado pos *apartheid*. Se evidenció que es riesgosa la incapacidad de traducir el proyecto de la reconciliación nacional en la reconciliación local, que resultó de la falta de mecanismos para la solución de conflictos y para negociar el retorno de antiguos “parias” en sus comunidades. Hay que recordar que las grandes visiones requieren mecanismos para su implementación.

²¹ WILSON, Richard A., *The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa: Legitimizing the Post-Apartheid State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

²² Ver los múltiples trabajos del doctor Sami Faltas.

Concluimos reflexionando sobre el trabajo que hicimos en Perú con la CVR-Sede Ayacucho. Trabajamos con comunidades que habían tomado varias posiciones durante el conflicto armado interno, algunas a favor de Sendero Luminoso y otras en contra. Nos impactó la creatividad de los campesinos frente a la necesidad de reconstruir sus comunidades y sus relaciones sociales. Nos enseñaron algo que vale la pena repetir acá. Si no abrimos un camino para aquellos y aquellas que querían dejar la guerra y recuperar su lugar en una comunidad humana, seguirán merodeando en la puna o, en el caso colombiano, se volverán al monte.

[111]